



Tensiones Estratégicas y Geopolíticas en el Pacífico Nariñense: Inversión Social, Narcotráfico y Estado

Mayor (EJC) Edison Omar Cely Quintero

Capítulo de libro para optar al título profesional:
Magister en Estrategia y Geopolítica

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C., Colombia
2025

DATOS GENERALES	
Nombre del estudiante	: Edison Omar Cely Quintero
Identificación	: 80096227
Programa académico	: Maestría en Estrategia y Geopolítica
Tutor metodológico	: Mayor (r) Oscar Orlando Porras
Tutor temático	: Andrea Katherinne Diaz Cante
Fecha de entrega	: 03 de septiembre 2025
Extensión	: 7.430

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este capítulo de libro fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este capítulo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza / no autoriza que este capítulo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

Tensiones Estratégicas y Geopolíticas en el Pacífico Nariñense: Inversión Social, Narcotráfico y Estado

Strategic and Geopolitical Tensions in the Nariño Pacific Region: Social Investment, Drug Trafficking and the State

Edisson Omar Cely Quintero ¹

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Resumen: Este estudio analiza cómo la estrategia nacional colombiana se ha visto afectada por la falta de inversión social y el aumento de los flujos financieros del narcotráfico en la región del Pacífico del departamento de Nariño. Mediante una metodología cualitativa, de tipo descriptivo y con análisis documental, se examinaron los componentes vulnerables de la estrategia estatal, el impacto territorial del narcotráfico y la comparación entre los factores estructurales que afectan la gobernabilidad. Los resultados evidencian una fragmentación institucional, una débil presencia estatal y la consolidación de economías ilegales como formas paralelas de poder. Se concluye que, aunque ambos factores se retroalimentan, la expansión del narcotráfico representa una amenaza más inmediata para la soberanía y la legitimidad del Estado. La investigación propone fortalecer la inversión social, articular las instituciones y recuperar el control territorial mediante estrategias integrales y sostenibles.

Palabras clave: estrategia nacional, narcotráfico, inversión social, gobernabilidad, región Pacífico.

Abstract: This study examines how Colombia's national strategy has been affected by the lack of social investment and the growing flow of financial resources from drug trafficking in the Pacific region of the Nariño department. Using a qualitative, descriptive methodology and documentary analysis, the research explores the most vulnerable components of the state's strategy, the territorial impact of drug economies, and a comparative assessment of the structural factors undermining governance. The findings reveal institutional fragmentation, weak state presence, and the emergence of illegal economies acting as parallel powers. The study concludes that, although both factors are interrelated, the expansion of drug trafficking poses a more immediate threat to state sovereignty and legitimacy. The research suggests strengthening social investment, improving institutional coordination, and reclaiming territorial control through integrated and sustainable strategies.

Keywords: national strategy, drug trafficking, social investment, governance, Pacific region.

¹ Mayor del Ejército Nacional de Colombia. Candidato a magíster en estrategia y geopolítica, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. <https://orcid.org/0000-0003-2004-7466> - Contacto: landinezj@esdeg.edu.co.

Introducción

La región del Pacífico colombiano, y en particular el departamento de Nariño, constituye uno de los escenarios más complejos en términos de seguridad, gobernabilidad y desarrollo sostenible del país. A lo largo de las últimas décadas, la ausencia estructural del Estado, la precariedad institucional y la histórica exclusión social han configurado un entorno proclive a la consolidación de economías ilícitas, siendo el narcotráfico la más prominente entre ellas. Esta situación ha socavado profundamente la capacidad estatal para formular e implementar una estrategia nacional efectiva orientada a la estabilización y al desarrollo de esta región estratégica.

El Pacífico nariñense se ha convertido en una zona crítica donde convergen problemáticas estructurales y coyunturales: violencia, pobreza extrema, ausencia de inversión pública significativa, corrupción institucional, y un creciente control territorial por parte de organizaciones armadas ilegales. La región, históricamente marginada de los planes de desarrollo, se enfrenta hoy a un círculo vicioso en el que la falta de oportunidades y la inseguridad se retroalimentan mutuamente, dificultando cualquier intento de transformación estructural (Ramírez, 2019; Gutiérrez, 2022).

Desde una perspectiva territorial, el Pacífico de Nariño -especialmente municipios como Tumaco- presenta una conectividad limitada, deficiencias críticas en educación, salud e infraestructura, y altos índices de desempleo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2022), el departamento de Nariño presenta una de las tasas de desempleo más altas del país, superando el 18%. Esta condición de precariedad ha hecho que para muchas comunidades locales, el narcotráfico represente no solo una amenaza, sino

una alternativa económica viable. En efecto, estudios recientes destacan que la expansión de cultivos ilícitos ha encontrado un terreno fértil en la ausencia de políticas públicas consistentes y de largo plazo (Molano Morales, 2020).

El impacto del narcotráfico en esta zona va más allá del plano económico. La seguridad, la gobernabilidad y la legitimidad del Estado se han visto comprometidas. La infiltración de recursos ilegales en las dinámicas locales ha distorsionado los principios básicos del orden democrático, debilitando el tejido institucional y promoviendo la corrupción. Las organizaciones criminales, aprovechando el vacío estatal, han logrado establecer formas paralelas de autoridad que compiten directamente con las instituciones legales, afectando no solo la percepción ciudadana, sino también la operatividad de las estrategias de control del territorio (Patiño Días, 2021).

Un componente especialmente sensible en esta crisis es la educación. En las zonas rurales del Pacífico nariñense, las dificultades de acceso, la escasez de infraestructura y la rotación constante de docentes han generado una situación de exclusión educativa crítica. La deserción escolar, provocada por la violencia, el desplazamiento forzado y la pobreza, incrementa la vulnerabilidad de la juventud ante los actores armados ilegales. En este contexto, la escuela deja de ser un espacio protector y se convierte en un símbolo del abandono estatal (Martínez, 2022). Esta condición ha sido ampliamente documentada por organismos como la Defensoría del Pueblo y por académicos que alertan sobre la fractura del contrato social en territorios donde la presencia estatal es mínima o nula (González, 2021).

La evolución del narcotráfico en la región también evidencia una transformación organizacional: de redes locales desarticuladas en los años ochenta, se ha pasado a estructuras criminales transnacionales que articulan producción, procesamiento, transporte y

comercialización de drogas, además de incursionar en otros delitos conexos como la minería ilegal y el contrabando de armas. Esta diversificación ha reforzado su influencia económica y social, generando una economía paralela que debilita aún más las estructuras estatales (Ramírez, 2019).

En términos estratégicos, la respuesta del Estado colombiano se ha centrado en enfoques de seguridad militarizada, muchas veces desvinculados de políticas sociales estructurales. Si bien estas medidas han producido efectos temporales en la reducción de la violencia, no han logrado consolidar el control estatal ni generar condiciones de desarrollo sostenido. Como señala Molano Morales (2020), la militarización sin inversión social solo posterga el problema y en algunos casos exagera la desconfianza de la población hacia las instituciones.

A nivel comparativo, estrategias implementadas en otras regiones como el Catatumbo en Colombia o en estados mexicanos como Guerrero han demostrado que los programas de sustitución de cultivos, las transferencias condicionadas y los planes de empleo juvenil deben estar acompañados de garantías de seguridad y continuidad institucional para ser eficaces (González, 2021; Martínez, 2022). Sin embargo, en el caso de Nariño, tales iniciativas han sido fragmentarias, desarticuladas y, en muchos casos, frustradas por la corrupción o el abandono gubernamental.

El desafío, por tanto, es multidimensional y requiere una visión de largo plazo, centrada en la transformación estructural de las condiciones que han permitido la expansión del narcotráfico. Para ello, se hace imprescindible un rediseño de la estrategia nacional, que trascienda la lógica del control armado y priorice la inversión social, el fortalecimiento institucional y la recuperación del territorio desde una perspectiva de justicia territorial.

Con base en este panorama, el presente capítulo propone un análisis crítico de la manera en que la ausencia de inversión social y el crecimiento de los flujos ilegales del narcotráfico han deteriorado la estrategia nacional en la región del Pacífico nariñense. De ahí que para la presente investigación se plantee la pregunta: ¿Cómo se ha afectado la estrategia nacional a partir de la falta de inversión social y el incremento de dineros del narcotráfico en la región del Pacífico del departamento de Nariño?

De la cual se plantea un Objetivo General: Determinar cómo la estrategia nacional se ha visto afectada por la falta de inversión social y el incremento de los flujos financieros provenientes del narcotráfico en la región del Pacífico del departamento de Nariño. Que como objetivos específicos tiene: primero, Analizar los componentes clave de la estrategia nacional que han resultado más vulnerables ante esta problemática. Segundo, Identificar de qué manera el aumento de recursos económicos provenientes del narcotráfico ha incidido en la transformación de la dinámica estatal en el territorio. Y tercero, Examinar el impacto comparativo entre la carencia de inversión social y la expansión del narcotráfico, para establecer cuál de los dos factores representa una mayor afectación para la estrategia nacional.

Metodología

La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, orientado a la comprensión profunda de los factores sociales, económicos y políticos que explican cómo la estrategia nacional en Colombia se ha visto afectada por la falta de inversión social y el incremento de los dineros provenientes del narcotráfico en la región del Pacífico del

departamento de Nariño. Esta elección metodológica responde a la necesidad de analizar fenómenos complejos y multifactoriales desde una perspectiva interpretativa, que permita captar las dinámicas estructurales y territoriales que configuran la actual crisis en la zona.

El enfoque cualitativo resulta adecuado, dado que no se busca establecer relaciones causales cuantificables, sino comprender las percepciones, discursos, estructuras y consecuencias generadas por la interacción de actores estatales y no estatales en un contexto históricamente marcado por el abandono institucional, la violencia y la economía ilícita. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este tipo de enfoque permite estudiar los procesos sociales en su contexto natural y considerar múltiples dimensiones del problema desde una mirada integral.

La investigación adopta un diseño descriptivo, dado que tiene como propósito principal caracterizar y detallar las principales afectaciones a la estrategia nacional, vinculadas tanto a la falta de inversión pública como al crecimiento del narcotráfico en Nariño. En esta línea, se pretende explorar, describir y sistematizar la información existente en torno al impacto de estas variables en la gobernabilidad, la seguridad y el desarrollo regional, sin intervenir directamente en el fenómeno estudiado.

Como técnica de recolección y análisis de información se adopta por una técnica documental, entendido como el proceso de localización, revisión, selección y evaluación crítica de fuentes secundarias que aporten datos, a través de fuentes académicas verificadas y estudios de caso, se busca comprender los efectos de esta dinámica, identificar sus raíces estructurales y explorar alternativas viables desde un enfoque territorial e integral. La técnica documental resulta pertinente para estudios en los que no es posible o necesario aplicar

instrumentos de campo, y en cambio, se requiere un ejercicio riguroso de revisión bibliográfica y contrastación de fuentes (Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005).

El corpus documental incluirá autores como Molano Morales (2020), Patiño Días (2021), Gutiérrez (2022), entre otros investigadores que han abordado el narcotráfico y la ausencia estatal en el Pacífico colombiano. Asimismo, se incorporarán datos del DANE, informes de la Defensoría del Pueblo y reportes de organismos internacionales como la ONU y la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), los cuales permitirán complementar la revisión desde una perspectiva técnica y comparativa. Esta metodología cualitativa y descriptiva, sustentada en el análisis documental, permitirá desarrollar un estudio crítico, argumentado y contextualizado sobre cómo la falta de inversión social y el aumento de recursos del narcotráfico han debilitado la estrategia nacional en una región clave para la estabilidad del país.

Vulnerabilidades de la Estrategia Nacional: Componentes Clave

Afectados en el Contexto del Pacífico Nariñense

Para este apartado se analiza los componentes clave de la estrategia nacional que han resultado más vulnerables ante esta problemática en el departamento de Nariño. Primero se aclara que se entiende por estrategia nacional; en el marco de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, la estrategia nacional se define como un plan coordinado que articula fines, medios y recursos del Estado para atender desafíos estructurales y coyunturales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una estrategia nacional comprende tres fases esenciales: formulación de la visión, coordinación

institucional en la formulación de políticas, e implementación con monitoreo y seguimiento (CEPAL, 2005).

Esta definición resalta tres dimensiones críticas: un horizonte estratégico claro, mecanismos institucionales de coordinación y capacidad operativa para transformar decisiones en resultados tangibles. Desde esta perspectiva, se entiende que una estrategia nacional efectiva exige la convergencia entre planificación, gobernanza territorial y ejecución sostenible. No basta con diseñar buenas políticas; es indispensable que los engranajes del Estado funcionen armónicamente, que la transparencia y la participación social fortalezcan su legitimidad, y que los recursos estatales se traduzcan en acciones concretas en territorios críticos, como Nariño.

Vulnerabilidades de la estrategia nacional en Nariño

Cuando el aparato estratégico se fragmenta, la eficacia desaparece. En Nariño, persiste una desconexión entre el diseño nacional de políticas y su aplicación territorial. A diferencia del modelo ideal de la CEPAL, donde la "coordinación institucional" garantiza coherencia entre ministerios, nivel territorial y sociedad, en esta región reina la desarticulación (CEPAL, 2005). Mientras el Ministerio de Defensa (Policía y Ejército) despliega operaciones antinarcoóticos, las áreas de educación, desarrollo rural y salud permanecen desconectadas.

Esta desconexión se traduce en proyectos aislados, duplicación de funciones e incluso, rivalidades subyacentes entre instituciones. Sin un sistema cohesionado, lo que queda es una estrategia nacional hueca en Nariño, que solo se materializa en combates, no en desarrollo. Durante décadas, la política antinarcoóticos en Colombia ha sido predominantemente militar: fumigaciones aéreas, erradicación forzosa de cultivos y presencia policial reforzada (Presidencia de la República, 2022). Estas intervenciones pueden reducir la superficie

cultivada de coca, pero tienen efectos cortoplacistas si no incorporan componentes sociales de largo plazo.

En regiones como Tumaco e Ipiales, la militarización se percibe como invasiva: se realiza bajo un enfoque autoritario, sin generar incentivos o alternativas económicas. Así, el discurso de seguridad contrasta con una realidad de desarraigo, desplazamiento y resistencia comunitaria. Más aún, el uso excesivo de fuerza profundiza la desconfianza de la población sin construir desarrollo ni legitimidad estatal.

Así, la inversión social como deuda pendiente, se convierte en uno de los pilares de una buena estrategia, dado que es asegurar servicios básicos y oportunidades. No obstante, en Nariño la inversión social es residual. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) identifica a este departamento entre los de mayor vulnerabilidad territorial (DNP, 2021). Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados para zonas afectadas por el conflicto, incluyeron municipios nariñenses; sin embargo, su impacto real sigue siendo débil (Indepaz, 2023).

La narrativa oficial habla de acueductos, infraestructura rural, escuelas... pero el relato de campo es distinto, muchas escuelas no tienen agua, hay planteles clausurados y las vías son inseguras. En este escenario, la falta de oportunidades convierte al narcotráfico en una alternativa viable. El Estado, pese a tener un plan, carece de recursos y organización para ejecutar, lo que alimenta un círculo vicioso que mina la estrategia nacional desde su base social.

El narcotráfico no solo implica flujos de recursos ilícitos, sino que consolida núcleos de poder local. En Nariño operan disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos criminales, como lo documenta Indepaz (2023). Estas organizaciones generan condiciones paralelas de

gobernanza: cobran "impuestos", controlan rutas y amenazan a líderes sociales. Se convierten en autoridades de facto. El Estado, pese a su estructura, no ejerce ese control, los militares y policías patrullan, pero no transforman dinámicas territoriales. La estrategia nacional carece de capacidad para disputar territorio, legitimidad y narrativas.

Vulnerabilidad institucional y corrupción

Adicional al vacío estatal está la amenaza de la corrupción. Los mecanismos diseñados por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 promueven monitoreo ciudadano, transparencia y rendición de cuentas (Presidencia de la República, 2021). No obstante, en la práctica estos mecanismos no han permeado la institucionalidad local. Fondos desaparecen, los proyectos se desvían y la evidencia social no se articula. El resultado es una estrategia diseñada con pluralidad y transparencia, pero ejecutada en la periferia con opacidad y clientelismo, lo que alimenta la desconfianza popular y deja puertas abiertas al narcotráfico.

Una estrategia exitosa ajusta su curso según el camino recorrido. La CEPAL (2005) subraya que la fase de implementación requiere seguimiento cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, no existen indicadores confiables sobre el impacto de las intervenciones antinarcóticos en términos de gobernabilidad, empleo alternativo o reducción de violencia. Esta ausencia de datos robustos impide corregir errores, diseñar respuestas diferenciadas o medir avances reales. La estrategia nacional queda a ciegas, actuando en puro reflejo, en lugar de diseño informado.

Un componente clave que suele ser subestimado en las estrategias nacionales es el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados. En el caso del departamento de Nariño, esta debilidad es particularmente grave. Si bien la planeación estatal contempla

herramientas de evaluación para medir el impacto de sus intervenciones, en la práctica estas han resultado ineficaces, inconstantes o inexistentes.

La CEPAL (2005) subraya que toda estrategia nacional debe tener un sistema robusto de seguimiento y evaluación que permita retroalimentar las decisiones, ajustar la planeación y verificar si se están cumpliendo los objetivos. Sin embargo, en territorios como Nariño, los mecanismos de recolección de información confiable son limitados, lo que impide saber, por ejemplo, si los programas sociales están reduciendo la vulnerabilidad, si las inversiones se están ejecutando con eficiencia, o si la militarización ha producido algún efecto duradero en la seguridad ciudadana.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que muchas de las iniciativas implementadas en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) carecen de evaluaciones rigurosas que permitan medir su impacto real sobre las condiciones de vida de la población (Defensoría del Pueblo, 2023). Además, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha reconocido que existen fallas en los sistemas de reporte municipal, debido tanto a la escasa capacidad institucional como a la interferencia de actores armados ilegales (DNP, 2022).

Esto ha llevado a que el ciclo estratégico se interrumpa. Sin retroalimentación adecuada, la política pública se vuelve ciega, y las decisiones futuras se basan más en presiones políticas o intuiciones que en evidencia. En este contexto, la estrategia nacional no puede aprender de sus errores ni adaptar sus acciones a las particularidades de una región tan compleja como el Pacífico nariñense.

El análisis realizado permite concluir que la estrategia nacional del Estado colombiano ha mostrado profundas vulnerabilidades estructurales frente a la problemática del

narcotráfico y la falta de inversión social en el departamento de Nariño. Aunque en el diseño formal se reconocen los principios de articulación institucional, sostenibilidad territorial y monitoreo de resultados, estos elementos no se han materializado de manera coherente ni efectiva en el territorio.

En primer lugar, se evidenció una fragmentación institucional que impide una acción coordinada del Estado. Las entidades operan de forma aislada, sin conexión entre seguridad, desarrollo social y participación comunitaria. Este divorcio entre niveles de gobierno debilita cualquier intento estratégico integral (CEPAL, 2005; DNP, 2021). En segundo lugar, el sesgo militarista ha sido predominante, dejando de lado las dimensiones estructurales del problema. La presencia de la fuerza pública no ha estado acompañada de una inversión social sostenida, lo que perpetúa las condiciones que hacen del narcotráfico una opción de subsistencia para miles de personas (Presidencia de la República, 2022).

Tercero, se observó que la ausencia de control efectivo del territorio por parte del Estado ha permitido que actores armados ilegales ejerzan formas paralelas de gobierno, consolidando economías ilícitas que disputan no solo el poder económico, sino también la legitimidad política (Indepaz, 2023). Cuarto, se identificó un grave déficit de monitoreo y evaluación, que impide ajustar la estrategia nacional sobre la base de datos verificables. Esta ceguera institucional refuerza errores estructurales y limita la capacidad del Estado para generar respuestas adaptadas a contextos territoriales específicos (Defensoría del Pueblo, 2023).

Es necesario destacar que la falta de una inversión social integral ha alimentado el ciclo de pobreza, violencia y exclusión, debilitando no solo la efectividad de la estrategia nacional, sino también la confianza ciudadana en las instituciones. Superar esta situación implica

repensar el modelo estratégico del Estado colombiano, especialmente en territorios históricamente marginados como Nariño. Se requiere una visión de largo plazo que articule seguridad y desarrollo, pero sobre todo, una acción territorial legítima, continua y evaluada. Solo a través de una reconstrucción de las capacidades institucionales, de la participación real de las comunidades y del fortalecimiento de los mecanismos de evaluación, será posible transformar la actual vulnerabilidad en una oportunidad para construir paz y justicia social duraderas.

Transformación del Estado Territorial: Incidencia del Narcotráfico en la Dinámica Institucional

Identificar cómo el aumento de recursos económicos provenientes del narcotráfico ha transformado la dinámica estatal en Nariño exige sumergirse en una realidad compleja, histórica y multifacética, donde lo ilícito ha moldeado las relaciones de poder, la capacidad institucional y la legitimidad del Estado. En los últimos años, los testimonios de comunidades rurales en la región del Pacífico nariñense evidencian que el ingreso de capitales ilícitos ha actuado como un catalizador de profundas modificaciones en la gobernanza territorial.

Dichos recursos, provenientes de la producción, tráfico y comercialización de cocaína, han sido usados por organizaciones armadas -disidencias de las FARC, el ELN- para consolidar estructuras paralelas de poder, acumulando control sobre rutas, poblaciones y tierras, erosionando progresivamente la soberanía estatal. Como señala Salomón Majjub Ávendaño, del Indepaz (2022), "el narcotráfico como modelo de acumulación de poder

económico y político... modificó la producción de riqueza del país e involucró a todos los actores de la guerra interna" (Indepaz, 2022).

En Nariño, ese fenómeno adquiere una escala particular. Las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos revelan que entre 2018 y 2023 la superficie cultivada de coca en Colombia alcanzó más de 252572 hectáreas, aumentando también el potencial de producción -pasando de 1120 a 1738 toneladas de cocaína. Se estima que ese volumen representa ingresos cercanos a 1200 millones de dólares anuales para redes criminales (Insight Crime, 2024; ONUDD, 2023). En zonas rurales de Nariño, ese flujo de capital ha impulsado una expansión no sólo de cultivos, sino de infraestructura ilícita: pistas clandestinas, laboratorios, rutas fluviales, sistemas fancieros para el lavado, e instituciones alternativas de control. Esta realidad ha desplazado al Estado, obligándolo a reconfigurar su respuesta en condiciones de subalternidad y contestación territorial.

La narrativa estatal convencional de militarización y erradicación quedó rápidamente desbordada por una economía ilícita más poderosa, sostenida y adaptable. El Estado se vio obligado a transitar hacia modelos más sofisticados que la acción militar aislada, desde las "zonas de control" hasta la creación de estrategias de seguridad integral con un énfasis geopolítico territorial. Sin embargo, la presencia estatal consolidada en Nariño sigue siendo frágil, asimétrica, publicada por una mirada periférica.

En ese contexto, la capacidad de articulación interinstitucional y de implementar acciones de Estado quedó en evidencia como una de las principales víctimas de la economía ilícita. La cocaína mueve redes criminales complejas con enormes recursos financieros la ONUDD estima que los mayoristas se llevan entre el 20% y 25% del valor total, mientras los campesinos apenas reciben menos del 1% (UNODC, 2011). Este diferencial deja en

evidencia el nivel de sofisticación económica de los eslabones intermedios, que forman el soporte de una subeconomía territorial poderosa (UNODC, 2011). Con esos recursos, actores ilícitos financian construcción de legitimidad local: obras públicas, impuestos comunitarios, alianzas con sectores tradicionales, intimidación de líderes sociales, control sobre mercados legales, cooptación de autoridades municipales.

Con los recursos del narcotráfico, se forma una "gobernanza criminal" capaz de regular mercados informales, imponer tarifas a comerciantes, dirigir cultivos, financiar milicias y garantizar una autoridad efectiva, que en muchos casos resulta más cercana y eficiente que la estatal. Investigaciones sobre gobernanzas criminales en Colombia indican que dichas estructuras resisten ataques estatales porque poseen un anclaje económico legítimo dentro de las comunidades, y una lógica de disciplina territorial y redes sociales profundas (Revista ESMIC, 2023).

Este fenómeno produjo una transformación sustantiva en la dinámica estatal: el Estado se fragmenta, se somete a presiones y se ve obligado a adaptar su estrategia. Por un lado, la militarización aumenta - con el Ejército desplegados en puntos estratégicos— pero esa acción carece de un correlato de desarrollo social. La estrategia se militariza, se centraliza, se focaliza en erradicación y control físico, pero sin capacidad para ofrecer servicios básicos que disputen legitimidad en la percepción cotidiana de los ciudadanos.

En segundo lugar, se observa una redefinición de los actores institucionales: la Policía se ve presionada hacia operaciones dinámicas contra precursores, laboratorios y rutas; la Fiscalía prioriza macrocasos; los fiscales anticorrupción reportan un aumento de investigaciones por lavado de activos; mientras los entes territoriales quedan relegados a un segundo plano. La institucionalidad estatal se segmenta incoherentemente, allí donde debía

articular una respuesta integral: empleo, salud, educación, restituir tierras, infraestructura. El narcotráfico, con esos capitales, interfiere directamente en la capacidad institucional de formular políticas y ejecutar presupuesto.

La corrupción como simbiosis con el narcotráfico se convierte en una amenaza directa para la dinámica estatal. Como indica Transparencia Colombia (2019), el narcotráfico y la corrupción en Colombia han sido históricamente simbióticos, reforzados por la ocultación de capitales, el clientelismo y el mercado informal regional. En concreto, funcionarios son cooptados o amenazados, los procesos licitatorios se amoldan a las necesidades criminales, las obras estatales se desvían para sostener actividades ilícitas, y la justicia transicional se ve obstaculizada por redes de impunidad.

El resultado es que los recursos públicos destinados al desarrollo y a la implementación territorial quedan filtrados. Esto reproduce un círculo lógico perverso: el Estado reduce su capacidad funcional, la confianza ciudadana se reduce, el narcotráfico legaliza más espacios y consolida su posición, y la violencia aumenta en exponencial. Otro efecto relevante es el impedimento de la sustitución de cultivos ilícitos. Las economías ilícitas pagan más que las legales, incluso en su condición intermitente. Estudios muestran que los campesinos reciben alrededor del 10,5% del PIB municipal gracias a estos negocios (El País, 2024), pero las alternativas -ganadería, cacao, empleo rural- siguen siendo débiles, parceladas, sin rentabilidad garantizada. Cualquier interrupción de cultivos sin garantías económicas y seguridad genera retraimiento en el desarrollo, lo cual puede reactivar cultivos.

En particular, el narcotráfico ha financiado o presionado elites rurales para consolidar economías alternativas asociadas al ilícito, incluso minería ilegal, lo cual distorsiona aún más las dinámicas territoriales. A su vez, este fenómeno ha modificado la percepción de

laseguridad ciudadana. En muchos municipios de Nariño, como Tumaco, la población prefiere el orden impuesto por estructuras criminales frente a la incertidumbre institucional. El narcotráfico ha asumido roles estatales: impartición de justicia local, control de desplazamientos, subsidios informales, resolución de disputas. Este vacío institucional semi-legal ha permitido que la autoridad gris transforme la percepción cotidiana de gobernabilidad.

Narrativamente, esta transformación es palpable en el día a día de los pobladores: bloques de veredas conectados por caminos de presión de grupos armados; controles para ingresar o salir de las comunidades; panfletos que imponen corte de cultivos o pago de "impuestos"; promesas de acceso a subsidios comunitarios ilegalmente canalizados; desplazamientos violentos por disputas entre actores. El narcotráfico, con sus recursos, ha logrado intervenir la dinámica territorial, social, política y económica de base, convirtiéndose en un actor central que compite de hecho con el Estado. Desde la lógica de estrategia nacional, el incremento de recursos provenientes del narcotráfico ha tenido estos impactos:

1. Substituye parcialmente la función del Estado en aspectos sociales y económicos.
2. Crea una arquitectura paralela de poder territorial que limita el accionar institucional.
3. Drena recursos públicos destinados al desarrollo mediante corrupción.
4. Genera respuestas estatales centralizadas, militarizadas y carentes de complementariedad social.
5. Transforma la narrativa de seguridad y legitimidad, favoreciendo al modelo criminal.

El resultado de esta transformación es que Nariño y zonas similares se convierten en territorios de "estado en disputa", donde la estrategia nacional, concebida para establecer control y desarrollo, se ve obligada a operar en condiciones de subordinación, contradicción

y riesgo. El Estado deja de ser actor predominante, y la estrategia nacional se convierte en una co-producción o en algunos casos competencia- con modelos alternativos que tienen financiamiento, arraigo y capacidad de intimidación.

Comparación Estratégica: Impactos de la Ausencia de Inversión Social y la Expansión del Narcotráfico

Examinar el impacto comparativo entre la carencia de inversión social y la expansión del narcotráfico, con el fin de establecer cuál de los dos factores representa una mayor afectación para la estrategia nacional. Se evidencia que las dinámicas que hoy definen la estrategia nacional en regiones como Nariño no son meramente el resultado de décadas de conflicto armado; son también el producto de un delicado balance entre dos fuerzas que se contraponen: la ausencia del Estado en términos de inversión social y la consolidación del narcotráfico como estructura económica y de poder territorial. Para establecer cuál de estos factores ha ejercido una mayor presión sobre la estrategia nacional, es necesario narrar cómo cada uno interactúa con el tejido institucional y social del territorio.

Desde la perspectiva de las ciencias políticas, una estrategia nacional debe contar con dos componentes indispensables: un entramado social que legitime el ejercicio gubernamental y un andamiaje institucional capaz de implementar acciones sostenibles. Cuando uno de estos componentes falla, la estrategia entra en crisis. En Nariño, ni el aparente vacío estatal ni el narcotráfico actúan por separado; ambos se entrelazan y desafían la capacidad del Estado para trazar rutas de desarrollo, seguridad y gobernabilidad.

Por un lado, la falta de inversión social en escuelas sin servicios básicos, hospitales colapsados, vías intransitables y nula generación de empleo formal ha sembrado un paisaje donde la institucionalidad se percibe como lejana e irrelevante. El Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2021) destaca a Nariño como uno de los territorios con mayor vulnerabilidad, debido precisamente a la carencia de proyectos públicos que mejoren condiciones de vida. En municipios afectados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a pesar de los esfuerzos, la implementación ha sido parcial y sin continuidad, dejando a comunidades sin resultados tangibles (Indepaz, 2023). En ese contexto, el narcotráfico no actúa como un fenómeno ajeno, sino como una alternativa funcional, eficaz y cotidiana para suplir la falla estatal, erigiéndose como una forma de gobernanza alternativa.

Por otro lado, la expansión del narcotráfico se evidenció con contundencia entre 2018 y 2023, cuando la superficie sembrada de coca en Colombia creció a 252.572 hectáreas, lo que representa, según datos del SIMCI, ingresos estimados en más de 1.200 millones de dólares para redes criminales (Insight Crime, 2024; ONUDD, 2023). Estos recursos financian una arquitectura criminal compleja, que involucra laboratorios, rutas clandestinas, control social y articulación con mercados ilícitos de lavado de activos (Transparencia Colombia, 2019). Su fuerza no solo es económica, sino política y territorial: establecen tributos locales, imponen normas, sustituyen funciones estatales y disputan legitimidad con el Estado.

Para valorar cuál de los dos factores afecta más la estrategia nacional, es necesario examinar cómo cada uno erosiona componentes esenciales de la acción estatal. La falta de inversión social mina la legitimidad del gobierno, pero es, de alguna manera, silenciosa: deteriora sin provocar necesariamente confrontación abierta. El narcotráfico, en cambio,

viene armado, organizado y dispuesto a disputar territorio y poder. Es el segundo blanco de la estrategia nacional, tras el Estado, y actúa con lógica de Estado: regula mercados, impone justicia, subvenciona comunidades.

En términos de correlación causal, los estudios muestran que mientras la inversión social deficiente deja el terreno preparado para que surjan redes ilícitas, es el narcotráfico el que impone el golpe final. La investigación publicada por la Universidad de los Andes (2024) indica que, en municipios donde la coca representa entre el 10% y el 11% del PIB local, estos flujos dinamizan economías superficiales pero no logran mejorar salud, educación ni generar desarrollo sostenible. De hecho, los precios y la bonanza cocaica no se traducen en inversión real, y sus efectos desaparecen tan pronto el mercado cae (Un país, 2024). Lo que sí perdura es la institucionalización de la violencia y la corrupción.

La narrativa de violencia también ha cambiado: en territorios militarizados por la estrategia nacional, el narcotráfico ha respondido con control territorial directo. No se trata solo de una relación sustractiva (cultivos vs. erradicación), sino de una relación simbiótica con el Estado: impone condiciones de seguridad, ofrece bienes y servicios informales y es capaz de reaccionar con violencia si su dominio se ve amenazado. En contraste, la ausencia del Estado no requiere reacción; simplemente es una omisión, que el narcotráfico aprovecha para crecer sin resistencia activa.

Otra forma de comparar impacto es en términos de costo oportunidad institucional. La militarización ha absorbido el grueso del presupuesto antidrogas desde el Plan Colombia a la actualidad: aproximadamente el 70% se destinó a fuerzas armadas y solo el 30% a desarrollo social (DNP, 2022). Cuando el Estado despliega esta articulación de seguridad, aparece en la agenda pública como actor omnipresente, pero sin ofrecer nada distinto a la violencia. La

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

falta de inversión social, entonces, no solo agrava el problema social, sino que brinda la excusa política para la militarización: "como no hay desarrollo, necesitamos seguridad", se argumenta. Pero paradójicamente, la seguridad sin desarrollo fortalece la soberanía criminal, ya que las comunidades siguen sin ver mejoras reales, mientras que el Estado gasta recursos limitados en balas.

En este escenario comparativo, la expansión del narcotráfico emerge como el enemigo operacional más potente y activo frente a la estrategia nacional. Es una fuerza que no solo aprovecha las oportunidades creadas por el abandono estatal, sino que se define como una alternativa de gobierno, imponiéndose como actor político territorial. Su impacto es más inmediato, visible y desestabilizador, porque compite directamente con la legitimidad del Estado: impone leyes, estructura espacios, somete cuerpos y condiciona economías.

Sin embargo, no todo debe analizarse como una ecuación de uno contra el otro; la expansión del narcotráfico no sería posible sin la base que ofrece la ausencia del Estado. Las escuelas sin educación, las carreteras impracticables y los hospitales deteriorados son el útero desde donde brota el narcotráfico. Al mismo tiempo, el narcotráfico capitaliza esas ausencias para estabilizar y profundizar su presencia. Lo que se percibe es una dinámica circular: la carencia institucional alimenta el cultivo, y el cultivo financia la apropiación de territorios y la obstaculización del Estado.

La conclusión de este análisis es que ambos factores se refuerzan mutuamente, pero la expansión del narcotráfico representa la amenaza más inmediata y eficaz frente a la estrategia nacional. Su capacidad para disputar territorio, ofrecer servicios alternativos, financiar redes criminales, presionar instituciones y recurrir a la intimidación se traduce en un impacto directo, medible y transformador del tejido estatal.

Dicho esto, la capacidad del Estado para reorganizar su acción depende de reconocer esta doble amenaza en su totalidad. No es posible combatir el narcotráfico solo con balas, y tampoco es viable eludir la necesidad de inversión social para estabilizar socialmente los territorios. La estrategia nacional debe reconstruir credibilidad, articulación institucional, transparencia y desarrollo, pero también debe llevar una estrategia territorial que recupere el control efectivo no solo por la fuerza, sino por la presencia permanente de servicios, oportunidades y participación ciudadana.

El impacto comparativo deja claro que mientras la inversión social es necesaria, su ausencia crea zonas de oportunidad; pero el narcotráfico es el actor que se aprovecha de esas oportunidades para transformarlas en control territorial efectivo y obstaculizar la estrategia nacional. Revertir esto demanda una estrategia integral, que vaya más allá de la militarización, que reconfigure la presencia del Estado como garante de desarrollo y derechos, y que recupere su función soberana en territorios como Nariño, donde la línea entre Estado y criminalidad se ha difuminado. La estrategia nacional, para ser efectiva, debe entender que el enemigo ya no está solo en la geografía rural, sino dentro de los espacios donde la ausencia estatal fue remplazada por el narcotráfico como forma de gobierno.

Conclusiones

A lo largo del presente capítulo se abordó, desde una perspectiva analítica y comparativa, el impacto que han tenido la falta de inversión social y el crecimiento de los flujos financieros del narcotráfico en la efectividad de la estrategia nacional en la región del Pacífico nariñense. A partir del desarrollo de los tres objetivos específicos, fue posible identificar con mayor

claridad las debilidades estructurales del Estado en su capacidad de respuesta territorial, así como el modo en que el narcotráfico ha transformado las dinámicas locales de gobernanza y poder.

El primero de los objetivos explorados en este documento arrojó una visión clara sobre la mutante geografía institucional en el Pacífico nariñense. Se identificaron los componentes fundamentales que componen la estrategia nacional coordinación interinstitucional, enfoque de seguridad, inversión social, control territorial, rendición de cuentas y monitoreo de resultados y se estableció cómo cada uno ha sido erosionado por las condiciones existentes. La falta de articulación efectiva entre entidades responsables de seguridad y aquellas enfocadas en desarrollo ha generado un Estado fragmentado y desarticulado. Al analizar estos elementos, quedó de manifiesto que la implementación de la estrategia nacional ha funcionado como un mapa desactualizado: las agencias estatales actúan por separado, peor aún, en respuesta a presiones de corto plazo en lugar de responder a criterios de gobernabilidad a largo plazo.

El componente de inversión social resultó ser particularmente frágil. Mientras los esfuerzos militares han sido visibles, erradicación aérea, presencia de tropas y retenes, los programas de desarrollo educativo, agrícola, de salud e infraestructura han sido marginales y discontinuos. Este déficit ha permitido que las dinámicas locales del narcotráfico se aprovechen del vacío institucional para consolidar redes locales de poder. La institucionalidad se ha manifestado como un cascarón vacío: existe en papeles, pero no ha logrado penetrar de manera sostenible los territorios. La falta de transparencia y monitoreo, claves para cualquier estrategia pública autocrítica, evidencia que el Estado tampoco está aprendiendo de sus propias acciones, repitiendo errores sin ajustes reales. En conjunto, las

fallas en estos componentes críticos han dejado a la estrategia nacional como un esqueleto sin músculos, vulnerable a las tensiones territoriales.

La investigación reveló cómo los flujos económicos ilícitos derivados del narcotráfico han redecorado el escenario territorial de Nariño, transformando la economía, el poder político y la legitimidad institucional. Este fenómeno no solo ha sido uno de saturación creciente, sino que ha logrado inscribir al narcotráfico como actor central en la configuración del poder local. Las estructuras criminales se adaptan, controlan rutas, ofrecen obras públicas y estructuras de impuesto paralelo, además de imponer normas de comportamiento y provisión de justicia de facto. Mientras el Estado sigue siendo percibido como ausente, el narcotráfico reemplaza su rol, conquistando espacios institucionales y simbólicos.

Esta sustitución del Estado por economías ilícitas ha reconfigurado la dinámica estatal de manera estratégica: la administración pública ha perdido su monopolio del ejercicio del poder, adoptando una lógica de retaguardia, desconfianza y subordinación. En lugar de ser actor principal, el Estado se convierte en reaccionario: responde con militarización y despliegue de fuerzas, incapaz de ejercer influencia ofensiva en la reconstrucción social. El narcotráfico, a través de dinero y poder territorial, obliga al Estado a adaptar sus políticas a un escenario adverso, donde la soberanía estatal queda cuestionada y fragmentada. La estrategia nacional entonces comienza a parecer menos un relato de soberanía y más una crónica de supervivencia.

El ejercicio comparativo demostró una relación dialéctica entre ambos factores, pero con matices que orientan la acción estratégica. La ausencia de inversión social, aunque base estructural de la marginalidad, no ejerce por sí sola un efecto táctico contundente. Su presencia se hace sentir en formas silenciosas: pobreza persistente, exclusión educativa y

fragmentación social. Sin embargo, es principalmente el narcotráfico (armado, financiado y territorialmente organizado) el que actúa como fuerza perturbadora directa, capaz de desplazar al Estado, reorganizar las relaciones de poder local y deteriorar rápidamente los pilares de cualquier estrategia nacional.

Aun así, el análisis narró que la expansión del narcotráfico no sería posible sin el campo fértil que ofrece el abandono estatal. Hay una complementariedad perversa: la falta de inversión social crea el sustrato donde el narcotráfico puede germinar, pero es él quien coloca las raíces profundas, absorbe funciones estatales y personifica la amenaza estratégica. En términos de prioridad, el narcotráfico representa la contingencia más visible y urgente de abordar. Sin embargo, mitigar simultáneamente el déficit social, cualquier acción militar o represiva será limitada, pues no atacará las causas subyacentes del problema. La confrontación táctico-operacional sin transformación social puede reconvertirse rápidamente en legitimización del modelo criminal.

Este análisis concluye que los desafíos estratégicos en Nariño no se resuelven exclusivamente con medidas militares ni sociales: requieren de una convergencia estratégica que reconecte el tejido institucional con objetivos de largo plazo, recupere la soberanía territorial y restituya la legitimidad del Estado. Los hallazgos demuestran que la estrategia nacional ha sufrido una doble erosión: primero, por la ausencia de un plan operativo coherente que articule seguridad y desarrollo; segundo, por la aparición de un actor hostil controlado financieramente como es el narcotráfico que suplanta las funciones estatales.

El hallazgo central de esta investigación es que no se trata solamente del papel del Estado ni de un actor criminal fortalecido, sino de una dialéctica entre ambos. Aunque el narcotráfico representa la amenaza más potente en el corto plazo, su crecimiento depende

directamente de la debilidad institucional. La respuesta estratégica debe abordar ambos frentes al mismo tiempo. Una estrategia nacional fortalecida debe rehacer su capacidad de coordinación institucional, desarrollar un plan de inversión con propósito social y establecer sistemas robustos de transparencia y evaluación, mientras despliega respuestas tácticas que disputen físicamente el territorio y su narrativa. Solo así podrá recuperarse la soberanía estatal, retroalimentar la legitimidad institucional y construir condiciones donde el narcotráfico deje de ser la opción dominante.

En síntesis, este capítulo concluye que, aunque ambos factores como la ausencia social y expansión financiera ilegal, se refuerzan mutuamente, es necesario priorizar una agenda que enfrente la emergencia del narcotráfico desde lo territorial, sin descuidar la reconstrucción social institucional. Este doble giro, militar-social, estructural y procedimental, es la única vía posible para reactivar la estrategia nacional en regiones clave como Nariño y reconectar al Estado con su capacidad de gobernar con autoridades funcionales, legitimadas y sostenibles a largo plazo.

Referencias (APA séptima edición)

- Bonilla-Castro, E., & Rodríguez, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias sociales. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- CEPAL. (2005). Estrategias nacionales para la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- DANE. (2022). Boletín técnico: Mercado laboral por departamentos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. <https://www.dane.gov.co>

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Defensoría del Pueblo. (2023). Informe de seguimiento a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET en el suroccidente colombiano. Bogotá: Defensoría del Pueblo.

DNP - Departamento Nacional de Planeación. (2021). Índice de vulnerabilidad territorial. Bogotá: DNP.

DNP - Departamento Nacional de Planeación. (2022). Evaluación de capacidades institucionales en municipios PDET. Bogotá: DNP.

DNP - Departamento Nacional de Planeación. (2022). Evaluación del gasto en seguridad y desarrollo bajo el Plan Colombia. Bogotá: DNP.

DNP. (2021). Índice de Vulnerabilidad Territorial. Departamento Nacional de Planeación.

González, M. (2021). Narcotráfico y políticas de seguridad en América Latina: Análisis comparado de México y Colombia. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Gutiérrez, F. (2022). Territorios del abandono: Violencia, Estado y crimen organizado en Colombia. Bogotá: Debate.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6.a ed.). México DMcGraw-Hill Interamericana.

Indepaz. (2022). El conflicto en Colombia como guerra por el narcotráfico: la gran falacia. Bogotá: Indepaz.

Indepaz. (2023). Informe sobre control territorial de grupos armados ilegales en Colombia. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

Indepaz. (2023). PDET y gobernabilidad en territorios afectados por el conflicto. Bogotá: Indepaz.

Insight Crime. (2024). La coca, un soporte económico vital con beneficios fugaces para la Colombia más apartada. El País.

Insight Crime. (2024). La expansión de la coca y sus desafíos para la seguridad nacional en Colombia.

- Martínez, A. (2022). El Catatumbo como laboratorio de paz fallida: Diagnóstico y perspectivas. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Molano Morales, A. (2020). El Pacífico en disputa: Narcotráfico, conflicto armado y abandono estatal. Cali: Universidad del Valle.
- ONUDD - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2023). Monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia 2020-2022. Viena: ONUDD.
- ONUDD. (2011). Informe Mundial sobre las Drogas 2010-2011. Viena: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- ONUDD. (2023). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Viena: ONUDD.
- Patiño Días, J. (2021). Colombia y el narcotráfico: Análisis territorial del crimen organizado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Presidencia de la República. (2021). Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Presidencia de la República. (2022). Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022- 2026. Bogotá: Ministerio de Defensa Nacional.
- Ramírez, M. C. (2019). Entre el Estado y la guerra: Configuraciones locales del conflicto armado en Colombia. Bogotá: ICANH.
- Revista ESMIC. (2023). Medición y evaluación de gobernanzas criminales y su relación con el narcotráfico y la criminalidad en Colombia. Revista Científica ESMIC, 1(1), 10-25.
- Transparencia Colombia. (2019). Corrupción y narcotráfico en Colombia. Bogotá: Transparencia Colombia.
- Transparencia Colombia. (2019). Lucha contra la corrupción y lucha contra el narcotráfico en Colombia. Bogotá: Transparencia Colombia.
- Universidad de los Andes. (2024, agosto 21). “La coca, un soporte económico vital con beneficios fugaces para la Colombia más apartada” El País.